
Derechos Humanos Internacionales

Thomas Buergethal

V

Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, 223

Von Dardel v. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 623
F.Supp. 246 (D.C.D.C.1985), 319

W

W., X., Y. y Z. v. Bélgica, Aplicaciones Nos. 6745 y 6746/74, 18 Y.B.
236 (1975), 137

Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190, 8 S.Ct. 456, 31 L.Ed. 386 (1888),
291

X

X v. Austria y Alemania, Aplicación No. 347/9/69, 28 Colección 132
(1969), 138

X v. República Federal de Alemania, Aplicación No. 27/28/66, 10
Y.B. 337 (1967), 137

X v. Suecia, Aplicación No. 209/5/63, 17 Colección de
Resoluciones de la Comisión Europea de Derechos Humanos
12 (1966), 136

Z

Zschernig v. Miller, 389 U.S. 429, 88 S.Ct. 664, 19 L.Ed.2^a
683 (1968), 318

Capítulo 1 Antecedentes Históricos de las Leyes de Derechos Humanos

I. Introducción

Este capítulo describe los principales antecedentes históricos de la moderna legislación internacional en materia de derechos humanos. En este libro definimos las leyes internacionales de derechos humanos como aquella legislación relativa a la protección de los individuos y los grupos contra las violaciones gubernamentales de sus derechos garantizados internacionalmente, y también al fomento de estos derechos. A esta rama del derecho en ocasiones se le conoce también como protección internacional de los derechos humanos o ley internacional de los derechos humanos. Aunque los eruditos podrían estar en desacuerdo sobre cuál de las dos etiquetas es más apropiada, aquí intercalamos ambas indistintamente.

II. Legislación anterior a la Segunda Guerra Mundial

§ 1-1. Introducción

Los antecedentes históricos de la legislación internacional de los derechos humanos se hallan en varias doctrinas e instituciones de derecho internacional.¹ Las más importantes de éstas son la intervención humanitaria, la responsabilidad del Estado por perjuicios a extranjeros, la protección a las minorías, el Sistema de Mandatos y el de Minorías de la Liga de las Naciones y la legislación humanitaria internacional. En la medida en que estas doctrinas e instituciones sobreviven hasta el día de hoy, podría decirse que forman parte esencial de la ley internacional de los derechos humanos en nuestros tiempos. Abordamos éstas en este capítulo con el propósito principal de explorar el papel que han desempeñado en el desarrollo de esa legislación.

§ 1-2. Derechos humanos y legislación internacional tradicional

La legislación internacional tradicional se definía como la ley que gobernaba las relaciones entre los Estados-Nación exclusivamente. Esto significaba que la legislación internacional sólo condicionaba y otorgaba derechos legales a los Estados. La definición tradicional se amplió algún tiempo después de la Primera Guerra Mundial para que abarcara a diversas organizaciones inter-gubernamentales de reciente creación, cuyos derechos se reconocían como muy limitados de acuerdo con la ley internacional. No se creía que los seres humanos a nivel individual tuviesen derechos legales, como tales, a nivel internacional; se les consideraba como objetos

y no como sujetos del derecho internacional. En virtud de que los Estados no tenían ninguna obligación legal internacional relativa a los individuos, se suponía que era el Estado cuya nacionalidad poseía el individuo el que debía hacerse cargo.²

Estas teorías sobre la naturaleza del derecho internacional llevan a la conclusión de que la manera como un Estado trataba a la gente de su nación no estaba regulada por el derecho internacional y, en consecuencia, no afectaba los derechos de otros Estados. Puesto que el derecho internacional no se aplicaba en los casos en los que un Estado violaba los derechos humanos de individuos de su misma nacionalidad, se suponía que la totalidad de la materia recaía exclusivamente en la jurisdicción nacional de cada Estado, lo cual impedía que otros Estados intercedieran o intervinieran en favor de los ciudadanos de cualquier Estado que maltratará sus derechos. Existían algunas excepciones a esta regla de no intervención. Se habla de ellas en las secciones siguientes.

§ 1-3. Intervención Humanitaria

La doctrina de la intervención humanitaria, tal como la expusieron Hugo Grotius en el siglo XVII y otros antiguos legisladores internacionales, reconocía como legítimo que uno o más Estados hicieran uso de la fuerza para detener el maltrato que un Estado infligiera a sus propios ciudadanos cuando esa conducta fuese tan brutal y a tan gran escala que sacudiera la conciencia de la comunidad de las naciones.³ Esta doctrina fue muy mal utilizada en el pasado y con frecuencia sirvió como pretexto para ocupar o invadir países más débiles.⁴ No obstante, la doctrina de la intervención humanitaria fue la primera en expresar la idea de que existían algunos límites para la libertad que gozaban los Estados, de acuerdo al derecho internacional, en lo tocante a los ciudadanos de su país.⁵ A veces los argumentos contemporáneos

sobre los derechos que las organizaciones internacionales o grupos de Estados poseen para utilizar la fuerza, en caso necesario, a fin de terminar con las violaciones masivas de los derechos humanos, han sido justificados haciendo referencia a esta doctrina. Lillich cuestiona la solidez de este argumento en tanto se trate de una acción militar unilateral llevada a cabo por Estados en lo particular.⁶

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se muestra cada vez más activo para encarar violaciones de los derechos humanos a gran escala, autorizando las medidas de coerción que le confieren los poderes del Capítulo VII de la Carta de la ONU. Este capítulo se aplica en situaciones relacionadas con "amenazas contra la paz, perturbación del orden público o actos de agresión".⁷ El Consejo de Seguridad ha realizado acciones de este tipo con los curdos en Irak, la ex Yugoslavia y Haití. Es prematuro asegurar que el Consejo de Seguridad ha adoptado una visión moderna de la doctrina de la intervención humanitaria colectiva, puesto que las resoluciones mediante las cuales se han autorizado tales medidas resultan ambiguas en términos de las normas legales y las consideraciones objetivas que les dan origen. Sin embargo, tomando en cuenta que sus decisiones recientes muestran importantes características asociadas por tradición con esta doctrina, parece que el Consejo se inclina a favor de esta posibilidad.⁸ La orden que emitió el Consejo de Seguridad del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia en el sentido de que se castigara a los responsables de haber cometido crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra en el conflicto armado de esa región, puede interpretarse también como una nueva modalidad de la intervención humanitaria para enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo, allí.⁹

§ 1-4. Primeros tratados de derechos humanos

Es un principio bien establecido en el derecho internacional el que un Estado pueda limitar su soberanía mediante tratados y con ello internacionalizar un tema que de otro modo no estaría regulado por el derecho internacional. Por ejemplo, si un Estado establece con otro Estado un tratado mediante el cual acuerdan tratar a sus ciudadanos de una manera humanitaria y otorgarles determinados derechos humanos, dichos Estados han internacionalizado, hasta el grado en que el tratado lo señale, ese tema en particular.¹⁰ Entre estos dos Estados, ninguno podrá en lo futuro aseverar legalmente que el trato que da a sus ciudadanos es un tema que pertenece exclusivamente a su jurisdicción nacional.¹¹

Este principio ha sido sumamente importante para el desarrollo de la legislación internacional de los derechos humanos y la internacionalización paulatina de estos derechos.¹² Aunque el proceso de internacionalización prosigue hasta el día de hoy (cada vez que un tratado de derechos humanos entra en vigor), éste empezó en el siglo XIX con la firma de tratados que proscribían el comercio de esclavos, y de acuerdos internacionales que protegían a las minorías cristianas en el Imperio Otomano (Turquía).¹³ Mediante estos tratados, los Estados que integraban el Consejo de Europa podían interceder diplomáticamente y en ocasiones incluso intervenir militarmente en favor de los pueblos cristianos del Imperio Turco.¹⁴ El Tratado de Berlín de 1878 resulta particularmente interesante por el estado legal especial que otorgaba a algunos grupos religiosos; también sirvió como modelo para el Sistema de Minorías que se estableció posteriormente en el marco de la Liga de las Naciones.

§ 1-5. La Liga de las Naciones

El Pacto de la Liga de las Naciones, aquel trato que en 1920 fundó la Liga y fue su constitución, no contenía disposiciones generales que abordaran los derechos humanos. La idea de que los derechos humanos deberían ser protegidos internacionalmente aún no tenía aceptación en la comunidad de las naciones ni se le consideraba con seriedad entre quienes esbozaron aquel tratado. El Pacto, sin embargo, sí incluía dos disposiciones (los Artículos 22 y 23) que se referían al desarrollo de la legislación internacional de los derechos humanos. La Liga cumplió también una importante función al colaborar con la puesta en marcha de los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial en materia de protección a las minorías.

1. El Sistema de Mandatos

El Artículo 22 del Pacto establecía el Sistema de Mandatos de la Liga. Esta disposición se aplicaba sólo a las ex colonias de los Estados que habían perdido la Primera Guerra Mundial. Ésta transformaba las colonias en Mandatos de la Liga a fin de ser administrados como tales por las potencias victoriosas. Estas últimas acordaron con la Liga administrar estos territorios de acuerdo con "el principio de que el bienestar y el desarrollo de los pueblos (nativos) constituyen una responsabilidad sagrada de la civilización..." Los Poderes Mandatarios también se abocaron a proporcionar a la liga informes anuales sobre el cumplimiento de sus responsabilidades. Estos informes eran revisados por la Comisión de Mandatos de la Liga.

La Comisión de Mandatos poco a poco adquirió más poder para supervisar la administración de los Mandatos y el trato que recibían los pueblos nativos.¹⁵ Con la disolución de la Liga

llegó a su fin esta evolución. En su lugar, las Naciones Unidas establecieron el Sistema de Administración Fiduciaria de la ONU, al cual se le confiaron poderes de supervisión sobre los Mandatos restantes y otros territorios sin auto-gobierno. Entre los últimos de estos territorios que lograron su independencia (en 1990) está Namibia. Había sido administrada por Sudáfrica bajo el Mandato de África del Suroeste. Durante muchos años Sudáfrica se negó a obedecer las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU que le exigían renunciar al control que ejercía sobre Namibia. Aun la más pequeña disputa entre la ONU y Sudáfrica respecto a Namibia generaba una gran cantidad de litigación ante el Tribunal Internacional de Justicia.¹⁶

2. Normas laborales internacionales

El art. 23 del Pacto de la Liga de las Naciones estaba relacionado con los derechos humanos en tanto que abordaba, *inter alia*, temas relativos a las "condiciones laborales justas y humanas para hombres, mujeres y niños". También contemplaba la creación de organizaciones internacionales que promovieran este objetivo. Esa función fue asumida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual se fundó aproximadamente al mismo tiempo que la Liga. La OIT sobrevivió a la Liga y en la actualidad es una de las Agencias Especializadas de las Naciones Unidas.¹⁷ Con los años, las actividades legislativas y la maquinaria de supervisión realizadas por la OIT, con objeto de promover y vigilar el cumplimiento de las normas laborales internacionales, han hecho importantes contribuciones al mejoramiento de las condiciones de trabajo y al desarrollo de la legislación internacional de los derechos humanos.¹⁸

3. El Sistema de las Minorías

La Liga de las Naciones desempeñó también una función muy importante en la creación de un sistema internacional de protección a las minorías.¹⁹ El Pacto no reglamentaba esta materia. En lugar de ello, a la Liga se le investía de poder por medio de un conjunto de tratados cerrados tras la Primera Guerra Mundial. Una consecuencia de aquella guerra fue la importante reorganización de la división política del mapa de Europa y el Medio Oriente. Surgieron muchos nuevos Estados y otros recuperaron su independencia. En algunos de estos países, en particular Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Bulgaria, Albania y Rumania, existían enclaves de minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Estas minorías tenían buenas razones históricas para temer que el nuevo orden político amenazara la sobrevivencia de sus culturas. Los gobiernos de las naciones vencedoras —los así llamados Aliados Principales y Potencias Asociadas— insistieron, por lo tanto, en que los nuevos Estados debían firmar tratados especiales para la protección de sus minorías étnicas, lingüísticas y religiosas.²⁰

El primer tratado que estableció este régimen de protección fue el Tratado entre los Aliados Principales y Potencias Asociadas y Polonia, firmado en Versalles el 29 de junio de 1919. Éste sirvió como modelo para otros tratados. En ellos, los Estados a los cuales se aplicaba el sistema de minorías garantizaban que no discriminarían a los miembros de las minorías y que les otorgarían los derechos especiales necesarios para la preservación de su integridad étnica, religiosa y lingüística, incluyendo el derecho de usar oficialmente sus idiomas, el derecho de conservar sus escuelas y el derecho de practicar sus religiones. Para asegurar que esto se cumpliera,

los tratados contaban con disposiciones parecidas al Artículo 12 del tratado con Polonia, el cual declaraba que "Polonia acepta que las estipulaciones de los Artículos precedentes, en tanto que afectan a personas pertenecientes a minorías raciales, religiosas o lingüísticas, constituyen obligaciones de interés internacional y deben ser puestas bajo la garantía de la Liga de las Naciones".

La Liga de las Naciones aceptó ser el garante de las obligaciones que asumían las partes en estos tratados. En el ejercicio que ésta hizo de tal función creó sistemas para proceder con las peticiones de las minorías donde se acusaran violaciones a sus derechos. El sistema fue relativamente eficaz y muy avanzado para su tiempo. El Comité de los Tres, del Consejo de la Liga, revisaba las peticiones, los Estados involucrados tenían oportunidad de presentar sus puntos de vista y, en el momento apropiado, se le solicitaba al Tribunal Internacional Permanente de Justicia que emitiera opiniones consultivas sobre los problemas legales en disputa.²¹ Además, la Liga se desempeñaba como garante de determinadas disposiciones políticas especiales a través de las cuales se protegían también los derechos de las minorías. Existe un caso fascinante donde se examina el significado de la "ley" en el contexto de la toma de poder Nazi en Danzig.²²

Si bien hasta la fecha sobreviven algunos decretos aislados relativos a las minorías, firmados en la era de la Liga, el sistema de minorías propiamente dicho, murió junto con la Liga.²³ Es importante, sin embargo, reconocer que algunas instituciones modernas de derechos humanos guardan un enorme parecido con las instituciones que la Liga creó para administrar el sistema de minorías.

Durante muchos años después de su creación, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales manifestaron muy poco interés en la protección de las minorías y se

enfocaron, en cambio, en los derechos individuales, en la no discriminación y en la protección igualitaria. Con el fin de la Guerra Fría y el crecimiento del nacionalismo en varias partes del mundo, la comunidad internacional ha vuelto a centrar su atención en la creación de normas e instituciones internacionales que protejan los derechos de las minorías. Algunas de las acciones que se han ejecutado en este sentido, dentro del marco de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, serán analizadas en el § 3-28, *infra*.

§ 1-6. Responsabilidad del Estado por perjuicios a extranjeros

En un momento temprano de su desarrollo, el derecho internacional tradicional reconoció que los Estados tenían la obligación de tratar a los ciudadanos extranjeros de acuerdo con ciertas normas mínimas de civilización o justicia. Se suponía que esta obligación le correspondía al Estado cuya nacionalidad poseía el individuo, pues los seres humanos como tales no estaban protegidos legalmente por el derecho internacional. Por lo tanto, cuando un gobierno extranjero sometía a los individuos a un trato que violaba el derecho internacional, se consideraba que únicamente el Estado de su nacionalidad tenía derecho a presentar su demanda, de acuerdo con el derecho internacional, en contra del Estado transgresor.²⁴ Sin embargo, cuando se otorgaba la indemnización por perjuicios, el Estado vencedor compensaba, por lo general, a sus ciudadanos por los daños que habían sufrido, si bien el derecho internacional no daba carácter obligatorio a este pago.

Por lo común, los litigios entablados con base en la ley de responsabilidad del Estado por perjuicio a extranjeros se

resolvían a través de negociaciones diplomáticas entre los gobiernos involucrados. A veces, si el Estado ofendedor incumplía las demandas de satisfacción, que por lo general consistían en el pago de una compensación, se permitía el uso de la fuerza.²⁵ Sin embargo, con mayor frecuencia las disputas se resolvían con medidas diplomáticas, arbitraje internacional o adjudicación.²⁶

La ficción de derecho de que el perjuicio sufrido en el extranjero era un perjuicio al Estado cuya nacionalidad poseía el ciudadano preservó la idea de que sólo los Estados estaban sujetos al derecho internacional. Trajo también la consecuencia negativa de dejar sin protección a los apátridas y a las personas que poseían la nacionalidad del Estado ofendedor. Ningún Estado se encontraba en condiciones de respaldar sus demandas, puesto que ninguno podía reclamar con validez que sus derechos se veían afectados cuando se dañaba a estos seres humanos.

La ley substantiva aplicable a las demandas presentadas por los Estados en nombre de sus ciudadanos emanó de la mayor parte de los así llamados "principios generales de ley reconocidos por las naciones civilizadas".²⁷ Las fuentes de estos principios eran el derecho natural y varias doctrinas legales nacionales que se aplicaban en el trato hacia los individuos. Los árbitros internacionales y los tribunales recurrieron a este cuerpo de leyes y estas doctrinas para dar solidez a conceptos tales como "denegación de justicia", "normas mínimas de justicia", etc. Cuando el derecho internacional moderno reconoció que los individuos, no importa cual sea su nacionalidad, deben gozar de ciertos derechos humanos básicos, los principios esenciales de la ley de responsabilidad del Estado aportaron una reserva de normas de las cuales era posible servirse para codificar las leyes internacionales sobre derechos humanos. Hoy, debido a la dramática evolución y

creciente codificación de las leyes de derechos humanos, estas leyes nutren la legislación de responsabilidad de Estado. Aquí es importante recordar, como señala oportunamente la Nueva Declaración de las Leyes de las relaciones Internacionales de los Estados (Tercera) (1987) (citada en las notas como Restatement [third]), "los diferentes orígenes históricos y de jurisprudencia entre la antigua ley de responsabilidad por perjuicios a extranjeros y la nueva legislación de derechos humanos no deben ocultar su afinidad esencial y su convergencia".²⁸ En la Nueva Declaración se continúa apuntando que "cuando se creó la legislación de los derechos humanos, la ley de responsabilidad por perjuicio a extranjeros, tal como se aplicaba a las personas físicas, empezó a referirse a las violaciones de sus 'derechos humanos fundamentales' y los Estados comenzaron a invocar normas contemporáneas de derechos humanos para cimentar sus demandas por perjuicio contra sus ciudadanos".²⁹

A pesar del desarrollo de las leyes de derechos humanos, la ley de responsabilidad de Estado por perjuicios a extranjeros sigue cumpliendo una función importante en las relaciones diplomáticas contemporáneas. Los Estados siguen respaldando las denuncias de sus ciudadanos, sean personas físicas o corporaciones. Hoy, estas acciones suelen basarse no pocas veces en derechos y obligaciones entreverados entre el creciente número de tratados bilaterales y multilaterales de inversión y en los llamados tratados de amistad, comercio y navegación. Con frecuencia estos tratados confieren jurisdicción a tribunales internacionales ya existentes o *ad hoc* para que resuelvan querellas relacionadas con la aplicación o interpretación de estos acuerdos y de este modo aportar un remedio internacional que en muchos casos quizá sea más efectivo que los procedimientos vigentes de los derechos humanos. Existe un caso reciente concerniente a un tratado

bilateral entre los Estados Unidos e Italia.³⁰ En ocasiones se han creado tribunales *ad hoc* para ventilar disputas similares. Un ejemplo interesante es el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, el cual fue creado en 1981.³¹ Más recientemente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creó la Comisión de Compensación de las Naciones Unidas para encargarse de las demandas individuales y colectivas en contra de Irak originadas por su invasión a Kuwait.³²

§ 1-7. Legislación humanitaria

Esta rama del derecho internacional puede definirse en la actualidad como "el componente de derechos humanos en el derecho de guerra".³³ La legislación humanitaria es, empero, mucho más antigua que la legislación internacional de derechos humanos. Comúnmente se ha señalado que su evolución moderna parte de una serie de iniciativas que los suizos asumieron en el siglo XIX, abocadas al logro de acuerdos internacionales que volvieran aplicables algunas normas humanitarias en la conducta de guerra.³⁴ Estas iniciativas fructificaron en la Convención de Ginebra de 1864, cuyo objetivo era proteger al personal médico y las instalaciones hospitalarias. Estipulaba también que "los combatientes heridos o enfermos, sin importar la nacionalidad a la que pertenezcan, deben ser recogidos y cuidados".³⁵

La Convención de Ginebra de 1864 fue seguida por la Convención No. III de La Haya, de 1899, la cual establecía reglas humanitarias similares, aplicables a las fuerzas navales de guerra. Estos tratados han sido revisados, aumentados y modernizados de vez en cuando y en la actualidad conforman un vasto cuerpo legal para abordar casi todas las características del conflicto armado moderno. La mayor parte de esa legislación está actualmente codificada en las cuatro Convenciones de Ginebra y los dos Protocolos Adicionales de éstas.³⁶

Aunque la legislación humanitaria moderna antedata al surgimiento de la legislación internacional de los derechos humanos y ejerció cierta influencia sobre ésta,³⁷ diversas disposiciones de los Protocolos más recientes reflejan los principios fundamentales de los instrumentos de los modernos derechos humanos internacionales.³⁸ También vale la pena acotar que las cláusulas de derogación de los principales tratados internacionales de derechos humanos incorporan, por referencia, los tratados y obligaciones de los Estados participantes en los mismos.³⁹ La legislación internacional moderna de los derechos humanos adopta, de este modo, la legislación humanitaria, en su afán por ofrecer al menos un poco de protección tanto en tiempos de paz como de guerra. Para profundizar en la totalidad de este tema, vea el capítulo de Legislación Humanitaria.⁴⁰

§ 1-8. La legislación pasada y moderna de los derechos humanos internacionales

El derecho internacional tradicional generó diversas doctrinas e instituciones con objeto de dar protección a diferentes grupos de seres humanos: esclavos, minorías, determinadas poblaciones nativas, ciudadanos en el extranjero, víctimas de violaciones masivas, combatientes, etc. Esas leyes y prácticas proporcionaron los apuntalamientos conceptuales e institucionales para construir la legislación contemporánea de los derechos humanos internacionales. Es más, muchas de las antiguas instituciones y doctrinas existen paralelamente a la legislación de derechos humanos, o en coordinación, o como parte de ésta. En ciertas áreas, esa legislación ha sido influida profundamente por sus antecesoras. Conocer las raíces históricas de la legislación moderna de los derechos humanos internacionales dará al lector una comprensión más profunda de tal legislación.

Como veremos en los capítulos siguientes, la diferencia más significativa entre la legislación moderna de los derechos humanos internacionales y sus antecedentes históricos estriba en que se supone que en la actualidad los seres humanos individuales poseen derechos internacionalmente garantizados como individuos y no como ciudadanos de algún Estado en particular. En la actualidad existe también un número creciente de instituciones internacionales con jurisdicción para proteger a los individuos contra violaciones de sus derechos humanos cometidos por el Estado de su nacionalidad o por cualquier otro Estado. Si bien sus recursos son con frecuencia muy inadecuados o ineficientes, el vasto cuerpo legislativo de los derechos humanos internacionales que existe el día de hoy —así como las proliferantes instituciones creadas para poner en ejecución esa legislación— ha internacionalizado el tema de los derechos humanos más allá de toda expectativa. A su vez, esta evolución ha generado una atmósfera política en la cual la protección de los derechos humanos se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda de las discusiones políticas internacionales contemporáneas entre los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y la gran red de organizaciones no gubernamentales.

El resultado es que a los seres humanos de todo el mundo se les ha hecho creer que los Estados y la comunidad internacional tienen la obligación de proteger sus derechos humanos. La expectativa que esto provoca hace que políticamente sea cada vez más difícil, para un creciente número de Estados, negar que, en efecto, tienen tal obligación, lo cual, por supuesto, facilita los esfuerzos de quienes promueven la protección internacional de los derechos humanos. En otras palabras, lo que en estos momentos presenciarnos es una revolución de los derechos humanos en plena marcha. Se ha

ganado mucho, pero aún hace falta consolidar las ganancias. Gran parte de la legislación necesaria ya está en los libros. Desafortunadamente, empero, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley son todavía muy débiles.⁴¹ La tarea pendiente consiste en "aflar" la ley mediante el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y la ampliación de su jurisdicción a todos los rincones del mundo.

Notas

- ¹ Henkin, L., *The Age of Rights*. 1990. Pág. 13.
- ² Oppenheim, L. *International Law: A Treatise* - 2/e. Vol. 1. 1912. Pág. 362.
- ³ Stowell, E.C., *Intervention in International Law*. 1921. Pág. 53; Sohn, L. y Buergenthal, T. *International Protection of Human Rights*. 1973. Pág. 137.
- ⁴ Brownlie, I., "Humanitarian Intervention", en Moore J.N. (ed.), *Law and Civil War in the Modern World*. 1974. Pág. 217.
- ⁵ Teson, F. *Humanitarian Intervention: An Inquiry Into Law and Morality*. 1988.
- ⁶ Lillich, R., "Intervention to Protect Human Rights". 15 McGill L.J. 1969. Pág. 205; Franck y Rodley, "After Bangladesh: The Law of Humanitarian Intervention by Military Force", 67 Am. J. Intl L. 1973. Pág. 275.
- ⁷ Carta de la ONU. Art. 39.
- ⁸ Delbrück, J., "A More Effective International Law or a New World Law?--Some Aspects of the Development of the International Law in a Changing International System", 68 Ind. L.J. 1993. Págs. 705, 707; Hutchinson, M., "Restoring Hope: U.N. Security Council Resolutions for Somalia and an Expanded Doctrine of Humanitarian Intervention". 34 Harv. Intl L.J. 1993. Pág. 624; También Farer, T., "Human Rights in Laws Empire: The Jurisprudence War". 85 Am. J. Intl L. 1991. Pág. 117; Higgins, R., "International Law and the Avoidance, Containment and Resolution of Disputes", 230 Recueil des Cours. 1991. Págs. 324-328.
- ⁹ Meron, T., "War Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law", 88 Am. J. Intl L. 1994. Págs. 78, 79.
- ¹⁰ Henkin, L., "Human Rights and 'Domestic Jurisdiction'", en Buergenthal, T. (ed.), *Human Rights, International Law and the Helsinki Accord* 21. 1977.
- ¹¹ Opinión consultiva sobre decretos de nacionalidad emitidos en Tunicia y Marruecos, P.C.I.J., Ser. B, No. 4. 1923.

- ¹² Buergenthal, T., "Domestic Jurisdiction Intervention and Human Rights", en Brown, P. y MacLean, D. (eds.), *Human Rights and U.S. Foreign Policy*. 1979. Pág. 111.
- ¹³ Por ejemplo, el Tratado de París del 30 de marzo de 1856 y el Tratado de Berlín del 13 de julio de 1878.
- ¹⁴ Sohn, L. y Buergenthal, T., *supra*. Págs. 143-92.
- ¹⁵ Sohn, L. y Buergenthal, T., *supra*. Págs. 337-373.
- ¹⁶ Opinión Consultiva sobre la Condición Internacional de África del Suroeste, 1950 I.C.J. Rev. 128; Opinión Consultiva sobre los Procesos Electorales, 1955 I.C.J. Rev. 67; Opinión Consultiva sobre de Audiencias de Solicitantes (1956) I.C.J. Rev. 23; Etiopía y Liberia v. Sudáfrica (Objeciones Previas), 1962 I.C.J. Rev. 319; Etiopía y Liberia v. Sudáfrica (Juicio), 1966 I.C.J. Rev. 6; Opinión Consultiva sobre las Consecuencias Legales para los Estados por la Continuación de la Presencia de Sudáfrica en Namibia, 1971 I.C.J. Rev. 16. Hay un análisis de estos casos y la resolución relevante en Sohn, L.B., *Rights in Conflict: The United Nations and South Africa*. 1994. Págs. 24-31, 148-49; Schwelb, E., "The International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Charter", 66; *Am. J. Intl L.* 1972. Pág. 337.
- ¹⁷ § 2-25, *infra*.
- ¹⁸ Jenks, C.W., *Human Rights and International Labour Standards*. 1960. Landy, E.A., *The Effectiveness of International Supervision: Thirty Years of I.L.O. Experience*. 1966. Leary, V., *International Labour Conventions and National Law*. 1981. También Cordova, "Some Reflections on the Overproduction of International Labor Standards", 14 *Comp. Labor L.* 1993. Pág. 1938.
- ¹⁹ Sohn, L. y Buergenthal, T., *supra*. Pág. 213.
- ²⁰ Hammun, H., *Autonomy, Sovereignty and Self-Determination*. 1990. Pág. 51.
- ²¹ Stone, J., *International Guarantees of Minority Rights*. 1934; Opinión consultiva sobre las escuelas para minorías en Albania, P.C.I.J., Ser. A/B, No. 64. 1935; Opinión consultiva sobre el Acceso a las Escuelas para las Minorías Alemanas en Alta

- Silesia, P.C.I.J., Ser. A/B, No. 40. 1931. Opinión consultiva sobre "Comunidades" Greco-Búlgaras, P.C.I.J., Ser. B., No. 17. 1930.
- ²² Opinión consultiva sobre la congruencia de algunos decretos legislativos en Danzig con la Constitución de la Ciudad Libre, P.C.I.J., Ser. A/B, No. 65. 1935.
- ²³ Modeen, T., *The International Protection of National Minorities in Europe*, 1969. Claude, I.L., *National Minorities: An International Problem*. 1955.
- ²⁴ Concesiones Palestinas Mavrommatis (Jurisdicción), P.C.I.J., Ser. A, No. 2. 1934.
- ²⁵ Por ejemplo, Finlay, Pacifico y Otras Demandas Británicas contra Grecia, Sohn, L. y Buergenthal, T., *supra*. Pág. 40.
- ²⁶ Las doctrinas legales más relevantes se analizan en Borchard, E.M., *The Diplomatic Protection of Citizens Abroad or the Law of International Claims*. 1915; Amerasinghe, C.F., *State Responsibility for Injuries to Aliens*. 1967.
- ²⁷ Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia (I.C.J.). Art. 38 (1)(c).
- ²⁸ Nota introductoria a la Parte VII. *Id.* Vol. 2. Pág. 145.
- ²⁹ *Id.* Pág. 1058. También García-Amador, F.V., Sohn, L. y Baxter, R., *Recent Codification of the Law of State Responsibility for Injuries to Aliens*. 1974.
- ³⁰ Caso que involucra a Elettronica Sicula S.p.A. (Elisi) 1989 I.C.J. Rev. 15.
- ³¹ Stewart, D. y Sherman "Developments at the Iran-United States Claims Tribunal: 1981/83". 24 *Va. J. Int'l L.* 1. 1984; Caron "The Nature of the Iran-United States Claims Tribunal and the Evolving Structure of International Dispute Resolution". 84 *Am. J. Int'l L.* 1990. Pág. 104.
- ³² Lillich, Brower, et al., "Claims against Iraq: The UN Compensation Commission and Other Remedies". 86 *Am. Soc. Int'l L. Proc.* 477. 1992.
- ³³ Buergenthal, T. y Maier, H., *Public International Law in a Nutshell*. 1985. Pág. 140.

³⁴ Boissier, P., *History of the International Committee of the Red Cross: From Solferino to Tsushima*. 1985.

³⁵ Art. 6(1). Para lo referente al texto de éste y otros instrumentos importantes, véase el Manual de la Cruz Roja Internacional, que el Comité Internacional de la Cruz Roja publica y actualiza periódicamente.

³⁶ Dinstein, Y., "Human Rights in Armed Conflict: International Humanitarian Law", en Meron, T., *Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues*. 1984. Pág. 345; Bothe, M., Partsch, K.J. y Solí, W., *New Rules for Victims of Armed Conflicts: A Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Convention of 1949*. 1982.

³⁷ Por ejemplo el Art. general 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949.

³⁸ Meron, T., *Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law*. 1989.

³⁹ Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 4; Convención Europea de Derechos Humanos, Art. 15; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 27; Meron, T., *Human Rights in Internal Strife: Their International Protection*. 1987. Pág. 23.

⁴⁰ Capítulo 6 (Legislación Humanitaria), *infra*.

⁴¹ Buergenthal, T., "The Human Rights Revolution", 23 St. Marys L.J. 1991. Pág. 3

Capítulo 2 El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

I. Introducción

El tema de este capítulo son las medidas sobre derechos humanos contenidas en la Carta de las Naciones Unidas; en él se presenta una visión general de las leyes e instituciones creadas en el marco de la ONU. Estas normas e instituciones legales derivan tanto de la Carta misma como de los tratados de derechos humanos adoptados bajo los auspicios de la ONU.

II. La Carta de la ONU

§ 2-1. Introducción

La legislación internacional moderna de derechos humanos es un fenómeno posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su evolución puede atribuirse a las monstruosas violaciones de los derechos humanos en la era de Hitler y a la creencia de que esas violaciones, y quizá la guerra misma, hubieran podido evitarse si en los días de la Liga de las Naciones